

## SENTENCIA DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008, Núm. 5

Sentencia impugnada: núm. 27-277-2006, dictada por la Décima Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

Materia: Constitucional.

Recurrentes: Luis Alberto Paulino Guzmán y La Primera Oriental, S.A.

Abogado: Dr. Julio E. Durán.

Dios, Patria y Libertad

### República Dominicana

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Jorge A. Subero Isa, Presidente; Rafael Luciano Pichardo, Primer Sustituto de Presidente; Eglis Margarita Esmurdoc, Segundo Sustituto de Presidente; Hugo Álvarez Valencia, Juan Luperón Vásquez, Margarita A. Tavares, Julio Ibarra Ríos, Enilda Reyes Pérez, Dulce Ma. Rodríguez de Goris, Julio Aníbal Suárez, Víctor José Castellanos Estrella, Ana Rosa Bergés Dreyfous, Edgar Hernández Mejía, Darío O. Fernández Espinal, Pedro Romero Confesor y José E. Hernández Machado, asistidos de la Secretaria General, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República, hoy 17 de diciembre de 2008, años 165° de la Independencia y 146° de la Restauración, actuando como Tribunal Constitucional, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia:

Sobre la acción directa en declaratoria de inconstitucionalidad intentada por Luis Alberto Paulino Guzmán, dominicano, mayor de edad, domiciliado y residente en la calle 5ta. núm. 52, del Milloncito de Sabana Perdida, y la compañía aseguradora La Primera Oriental, S.A. entidad organizada de acuerdo a las leyes de la República, con su asiento y local principal, en la avenida Las Américas número 4, del ensanche Ozama (El Farolito), de la Provincia Santo Domingo, Municipio Este, debidamente representada Apolinar Rodríguez Almonte, presidente del Consejo de Administración de dicha compañía, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0525077-3, con domicilio y residencia en la Avenida Las Américas número 4 del Ensanche Ozama (El Farolito), en la Provincia de Santo Domingo, Municipio Este; quien tiene como abogado constituido al doctor Julio E. Durán, dominicano, mayor de edad, abogado, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0323310-2, con estudio profesional abierto de manera permanente en la calle Jacinto J. Peinado núm. 101, Ciudad Nueva, contra la sentencia núm. 27-277-2006, dictada por la Décima Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional;

Visto la instancia firmada por el doctor Julio E. Durán, depositada en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 18 de agosto de 2008, que concluye así: “**PRIMERO:** Declarar la inconstitucionalidad de la sentencia No. 27-277-06, del 31-08-2007, dictada por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, 10ma. Sala. Porque la misma: a) Fue dictada en base a la Ley 341-98, del 15-07-1998 (Ley derogada); b) la sentencia está caduca, al ser notificada fuera del plazo legal de los seis meses, que prevé el artículo 456 del

Código de Procedimiento Civil, y además, por: a) Por ser contrario al artículo 456 del Código de Procedimiento Civil; b) Por ser contrario al artículo 46, que establece la nulidad de los decretos y resoluciones que sean contrarios a lo que establece la Constitución de la República; c) Por ser contrarios inciso 5 del artículo 8 que establece la igualdad de los derechos de los ciudadanos; d) Por ser contrarios al artículo 67, que establece el privilegio exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de conocer la inconstitucionalidad de la Ley; e) Por ser contrarios al artículo 100 que establece la condenación de todo privilegio que tienda a quebrantar la igualdad de todos los dominicanos; f) Violatorio al Debido Proceso de Ley; g) Violatorio al Derecho de Defensa; h) Violatorio al Derecho de Racionalidad de la Ley; **SEGUNDO:** Que esta Honorable Suprema Corte de Justicia tengáis a bien declarar las costas de oficio, por tratarse de una instancia de orden constitucional”;

Visto el dictamen del Magistrado Procurador General de la República del 26 de septiembre de 2008, el cual termina así: “Único: Declarar inadmisibile la acción directa en declaratoria de inconstitucionalidad interpuesta por el señor Luis Alberto Paulino Guzmán y la compañía aseguradora La Primera Oriental, S. A. a través de su abogado el Dr. Julio Durán por los motivos expuestos”;

La Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los textos legales invocados por el impetrante, así como los artículos 67, inciso 1ro. y 46 de la Constitución de la República Dominicana, y 13 de la Ley núm. 156 de 1997 que modifica la Ley núm. 25-91, de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia;

Considerando, que el impetrante solicita la declaratoria de inconstitucionalidad de la sentencia núm. 27-277-2006, dictada por la Décima Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por estar caduca, y por ser violatoria a los derechos fundamentales y contraria a la Constitución de la República;

Considerando, que el impetrante alega en síntesis lo siguiente: 1) Que la compañía aseguradora La Primera Oriental, S. A. convino pactar con el Estado Dominicano, bajo el contrato núm. 10426, otorgar la libertad provisional bajo fianza del imputado Luis Alberto Paulino Guzmán, el cual fue condenado por la Décima Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional sin cumplir las formalidades de ley vigentes en ese momento; 2) Que el imputado no cumplió con las medidas de coerción impuestas a éste; 3) Que la Décima Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, obviando el espíritu del legislador, contraviene la ley vigente en ese momento (Ley núm. 76-02), y cancela bajo la antigua Ley núm. 341-98 el contrato de fianza núm. 10426, violando con ello los preceptos establecidos constitucionalmente; 4) Que el imputado había fallecido en fecha 7 de abril de 2006, según consta en el acta de defunción núm. 354 expedida por el Oficial del Estado Civil de la Primera Circunscripción de Santiago; 5) Que al momento del Juez dictar la sentencia núm. 27-277-2006 del 31 de agosto de 2006, la Ley núm. 341-98 había sido derogada por la Ley núm. 76-02; 6) Que el contrato de fianza fue firmado entre el Estado Dominicano y la compañía aseguradora, y que en ninguna parte del

mismo figura el imputado, y mucho menos se asumió el compromiso contractual de pagarle parte de dicho contrato a la hora de liquidarlo o cancelarlo; 7) Que el prevenido fue condenado sin tomar en consideración el debido proceso de ley; 8) Que con dicha decisión fueron violados en su perjuicio los derechos y principios fundamentales como el derecho a la seguridad jurídica, el derecho de defensa, el derecho del debido proceso de ley y el derecho a la racionalidad de las decisiones de la administración de justicia;

Considerando, que es competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia, de conformidad con el artículo 67, inciso 1 de la Constitución de la República, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere la ley, conocer en única instancia de la constitucionalidad de las leyes, a solicitud del Poder Ejecutivo, de uno de los Presidentes de las Cámaras del Congreso o de parte interesada; que el artículo 46 de dicha Constitución establece que son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución reglamento o acto contrario a la Constitución;

Considerando, que la solicitud que se examina obviamente ha sido realizada por parte interesada, y no está dirigida contra ninguna de las normas señaladas por el referido artículo 46 de la Constitución Dominicana, sino contra una decisión emanada de un tribunal del orden judicial, la cual se encuentra sujeta a las acciones y recursos instituidos por la ley, por lo que la presente acción resulta inadmisibile;

Por tales motivos,

**Resuelve:**

**Primero:** Declara inadmisibile el recurso de acción directa en declaratoria de inconstitucionalidad contra la sentencia núm. 27-277-2006, dictada en fecha 31 de agosto de 2006 por la Décima Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, incoada por Luis Alberto Paulino Guzmán y la compañía aseguradora La Primera Oriental, S.A.; **Segundo:** Ordena que la presente sea comunicada al Procurador General de la República, para los fines de lugar y publicada en el Boletín Judicial para general conocimiento.

Firmado: Jorge A. Subero Isa, Rafael Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Hugo Alvarez Valencia, Juan Luperón Vásquez, Margarita A. Tavares, Julio Ibarra Ríos, Enilda Reyes Pérez, Dulce Ma. Rodríguez de Goris, Julio Aníbal Suárez, Víctor José Castellanos Estrella, Ana Rosa Bergés Dreyfous, Edgar Hernández Mejía, Darío O. Fernández Espinal, Pedro Romero Confesor y José E. Hernández Machado. Grimilda Acosta, Secretaria General

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

[www.suprema.gov.do](http://www.suprema.gov.do)